

PERIODO 125°



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

21^a REUNION – 17^a SESION ORDINARIA
19 DE DICIEMBRE DE 2007

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación don JULIO C. C. COBOS,
del señor presidente provisional del Honorable Senado don JOSE J. B. PAMPURO
y del señor vicepresidente 1° del Honorable Senado don JUAN C. MARINO

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor JORGE L. A. TIEPPO

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor MARIO DANIELE y señor ROBERTO V. MAIQUES



PRESENTES:

BASUALDO Roberto G.
 BIANCALANI, Fabio
 BONGIORNO, María José
 BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
 CABANCHIK, Samuel
 CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 COLAZO, Mario
 COLOMBO de ACEVEDO, María Teresita del Valle
 CORRADI de BELTRAN, Ana María
 CORREGIDO, Elena
 DIAZ, María Rosa
 ESCUDERO, Sonia Margarita
 ESTENSSORO, María Eugenia
 FELLNER, Liliana B.
 FERNANDEZ, Nicolás Alejandro
 FILMUS, Daniel
 FORSTMANN, Selva Judith
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GALLEG0, Silvia Ester
 GIOJA, César Ambrosio
 GIRI, Haide Delia
 GIUSTI, Silvia Ester
 GIUSTINIANI, Rubén Héctor
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel
 GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
 ITURREZ de CAPELLINI, Ada del Valle
 JENEFES, Guillermo Raúl
 LATORRE, Roxana Itatí
 LORES, Horacio
 MARIN, Rubén Hugo
 MARINO, Juan Carlos
 MARTINEZ, José Carlos
 MASSONI, Norberto
 MAYANS, José Miguel Angel
 MAZA, Ada Mercedes
 MENEM, Carlos Saúl
 MIRANDA, Julio Antonio

MORALES, Gerardo Rubén
 NEGRE de ALONSO, Lilliana Teresita
 NIKISCH, Roy Alberto
 OSUNA, Blanca Inés
 PAMPURO, José Juan Bautista
 PARRILLI, Nanci María Agustina
 PERCEVAL, María Cristina
 PEREZ ALSINA, Juan Agustín
 PERSICO, Daniel Raúl
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 PICHETTO, Miguel Angel
 PINCHETTI de SIERRA MORALES, Delia Norma
 QUINTELA, Teresita Nicolasa
 RACHET, Emilio Alberto
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RIOFRIO, Marina Raquel
 RIOS, Roberto Fabián
 RODRIGUEZ SAA, Adolfo
 ROSSI, Carlos Alberto
 SAADI, Ramón Eduardo
 SALAZAR, Carlos Eduardo
 SANCHEZ, María Dora
 SANZ, Ernesto Ricardo
 TORRES, Eduardo Enrique
 TROADELLO, Mónica
 URQUIA, Roberto Daniel
 VERA, Arturo
 VERANI, Pablo
 VIANA, Luis Alberto
 VIGO, Elida María
 VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTES CON AVISO:

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda Beatriz
 MARTINEZ, Alfredo Anselmo
 ROMERO, Juan Carlos

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 3.)
2. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 3.)
3. Asuntos entrados. (Pág. 6.)
4. Sesión de acuerdos. (Pág. 6.)
5. Reserva de un asunto. (Pág. 16.)
6. Promoción al grado inmediato superior del vicedomador Jorge Luis Ribal. (Pág. 16.)
7. Consideración en conjunto de dos proyectos sobre tablas. Repudio por el agravio a la Nación Argentina por el gobierno de los Estados Unidos. Citación al jefe de Gabinete de Ministros. (Pág. 17.)
8. Licencia sin goce de dieta del señor senador Calcagno y Maillman. (Pág. 39.)
9. Modificación de la ley 24.240. (Pág. 40.)
10. Restitución de derechos a personal del Ejército. (Pág. 64.)
11. Regulación de la actividad de tatuajes en la piel. (Pág. 65.)
12. Modificación del IVA. (Pág. 67.)
13. Prórroga de la suspensión de la exención del pago del impuesto a las ganancias en las exportaciones. (Pág. 68.)
14. Regulación de derechos de exportación para productos agropecuarios. (Pág. 69.)

15. Modelo Nacional de Promoción para la Creación y Desarrollo de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos y/o Innovadores. (Pág. 72.)
16. C.D.-188/06: ley sobre custodia de bienes objeto de secuestro. (Pág. 75.)
17. S.-685/07: exportación, importación, tránsito y transbordo de material bélico. (Pág. 75.)
18. C.D.-188/06: ley sobre custodia de bienes objeto de secuestro (continuación). (Pág. 76.)
19. C.D.-147/06: modificación de ley 20.744. (Pág. 77.)
20. Ampliación del régimen jubilatorio especial para docentes universitarios nacionales. (Pág. 79.)
21. Transferencia de un inmueble del Estado nacional a la provincia de Corrientes. (Pág. 82.)
22. Consideración en conjunto de diversos proyectos.
 - S.-3.157/07 Beneplácito por la presentación de alumnos de la Escuela Polimodal N° 5.153 de Alto La Sierra, Salta.
 - S.-3.580/07 Beneplácito por la instalación de una estación meteorológica en Salar del Rincón, Salta.
 - S.-3.156/07 Beneplácito por la reelección de Mirta Roses Periago como directora ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud.
 - S.-3.686/07 Programa de Control de Hidatidosis en la reserva tehuelche de El Chalia.
 - S.-3.605/07 Homenaje a la localidad de Villa Elena, San Luis.
 - S.-3.024/07 Servicio semipúblico de larga distancia en Salta.
 - S.-3.693/07 Festival de la Salamanca, La Banda, Santiago del Estero.
 - S.-3.691/07 Vulneración de garantías del debido proceso de Juan Daniel Pintos Garrido.
 - S.-3.687/07 Fallecimiento de la senadora nacional doña Hilda Nélida Castaneira de Vaccaro, por la provincia de Santa Fe.
 - S.-3.695/07 Rechazo de lo impuesto en el Tratado de Lisboa, que incluye a las islas Malvinas en el Régimen de Asociación de los Países y Territorios de Ultramar.

23. Apéndice:

- I. Asuntos entrados. (Pág. 84.)
- II. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág. 165.)
- III. Actas de votaciones electrónicas. (Pág. .)
- IV. Inserciones. (Pag. .)

Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el resto figura en el apéndice.

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 18 horas del miércoles 19 de diciembre de 2007:

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. — Invito al señor senador José Mayans a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Mayans procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. *(Aplausos.)*

2

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.

—El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 19/12/07:

— Sesión para consideración de acuerdos.

Tratamientos sobre tablas a solicitar:

— Dictamen en varios proyectos de ley presentados por diferentes señores senadores sobre defensa del consumidor (65/07 y otros).

— Proyecto de ley de las senadoras Giri y Caparrós sobre la ley de regularización de la actividad de tatuajes en la piel (S.-1.987/06).

— Dictamen en proyecto de ley en revisión prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2008, inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.-162/07).

9

MODIFICACION DE LA LEY 24.240

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de dictamen de las comisiones de Derechos y Garantías y de Legislación General sobre modificación de la ley 24.240 (S.-65/06).

Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: en primer lugar, corresponde constituir la Cámara en comisión, a efectos de ratificar el proyecto de dictamen que obra sobre las bancas, para luego proceder al abordaje del tema. El miembro informante puedo ser yo o el señor senador Petcoff Naidenoff.

En segundo lugar, corresponde fijar una lista de oradores, para luego estimar una hora de votación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: quiero aclarar una cuestión.

En realidad, el dictamen nunca fue tal, porque en la última sesión no hubo consenso sobre dos artículos y el despacho no fue firmado. Yo integro ambas comisiones y no hubo nunca firmas suficientes como para que el proyecto tuviera en dictamen.

Sr. Pichetto. — Estamos de acuerdo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: quiero solicitar que se dé el abordaje en general al proyecto para que luego, en ocasión del tratamiento en particular, cada senador pueda plantear sus sugerencias o dudas respecto de aquellas cuestiones que imposibilitaron la construcción de un dictamen definitivo.

Señalo que no hay dictamen, porque los mandatos de los legisladores integrantes de las comisiones fenecieron en virtud de la renovación parcial del cuerpo.

Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.

1

Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. — Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.

Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.

2

Conferencia

Sr. Presidente. — Queda abierta la conferencia.

Corresponde considerar el proyecto de ley por el que se modifica la ley 24.240, de defensa del consumidor.

Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto de dictamen.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Queda cerrada la conferencia.

3

Votación

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: el proyecto en consideración constituye indudablemente una reforma trascendental y sustancial a la ley 24.240.

Sin embargo, y en forma previa a su abordaje, en virtud de algunas versiones periodísticas debemos decir que, en realidad, el tratamiento de la cuestión en la actualidad está antecedido por una fuerte labor parlamentaria, que se ha dado en el seno de las comisiones de Legislación General y de Derechos y Garantías y en el arduo trabajo de los asesores, porque en definitiva el proyecto que vino de la Cámara de Diputados recogía una experiencia importante,

pero adolecía en su redacción de algunos errores formales que iban a menguar lo que nosotros queríamos consolidar, que era justamente la defensa del usuario y del consumidor frente a algunos abusos que se cometen.

Como esta iniciativa está llamada a interferir en miles de relaciones vinculadas con infinidad de aspectos, obligó a que nosotros debamos reunirnos en varias oportunidades. En realidad, tanto la Comisión de Legislación General como la de Derechos y Garantías trabajaron en forma separada. No obstante, hemos hecho más de diez reuniones de senadores y más de tres plenarios de comisiones, a los que invitamos a las autoras del proyecto —diputadas Patricia Vaca Narvaja y Estela Córdoba—, quienes participaron activamente, porque era indudable que había que trabajar en la modificación de algunos aspectos de la ley.

Asimismo, al seno de las comisiones vinieron representantes de infinidad de asociaciones, tanto de consumidores como de no consumidores. Todas las audiencias fueron absolutamente públicas y en sus versiones taquigráficas consta la participación de todos los senadores. Así, todas las supuestas observaciones que se podían hacer y que nosotros invitamos a que se efectuaran, no sólo de los consumidores sino de aquellas empresas que tenían que ver con esta ley, pudieron hacerse en forma pública; y allí en la versión taquigráfica está lo que han dicho. No obstante, en el texto definitivo del proyecto consta la receptividad que estas sugerencias han tenido o no.

Digo esto, porque entre los temas que abordó algún medio periodístico estaba el de una fuerte presión. Efectivamente, esta presión siempre existe cuando uno aborda un tema. La Comisión de Legislación General elaboró un proyecto de dictamen y tuvimos diferencias respecto de dos artículos que luego voy a comentar; y lo mismo ocurrió con la Comisión de Derechos y Garantías. En este sentido, siempre trabajamos en absoluta sintonía y hemos abordado una iniciativa de la cual el Senado de la Nación puede sentirse absolutamente orgulloso, porque han trabajado en forma totalmente seria no sólo sus senadores sino el conjunto de asesores, a quienes en este momento expresamente reconozco su labor.

Entre los textos que hemos debido pulir, corregir y readaptar nos encontramos con que en el

artículo 1º del proyecto de ley figuran los servicios adquiridos o utilizados en forma gratuita. Y este es un aspecto que no estaba contemplado en la Ley de Defensa del Usuario y Consumidor ni en el proyecto de ley en revisión. Sin embargo, nosotros creímos absolutamente oportuno incorporar las ofertas gratuitas, porque en el caso de deficiencia en su formación o incumplimiento en la formalidad de la oferta, normalmente generan perjuicios por los que el consumidor necesariamente debe ser resarcido.

Entonces, la oferta gratuita fue expresamente incorporada, así como también fueron integrados los derechos relacionados con los tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. Todo el mundo sabe que estas figuras han dado motivo a infinidad de abusos, sin embargo no estaban incorporados en el proyecto de ley en revisión, por lo que el Senado ahora las incluye. Con ello, el aporte que se hace no sólo es significativo sino tremendamente importante.

Un tema que mereció mucho debate fue justamente la modificación del artículo 2º, que en su redacción originaria preveía contemplar los servicios profesionales dentro del objeto de la ley de defensa de usuarios y consumidores. Así llegó de la Cámara de Diputados y nosotros entendimos, en principio, que era un error. Sobre el particular debo admitir que, a pesar de que soy abogado, me parecía que excluirlos en forma absolutamente definitiva de la ley de usuarios y consumidores podía entenderse como una especie de defensa corporativa. Es cierto que hay una serie de organizaciones profesionales que funcionan a la perfección y que los usuarios de servicios tienen en ellas un adecuado abordaje de los distintos problemas. Pero no menos cierto es que en algunas provincias esa situación es un tanto más dificultosa. Frente a ello hemos acordado, con presencia de los colegios profesionales, sin vulnerar las autonomías provinciales y corrigiendo defectos formales que traía el proyecto, una redacción que establece que la autoridad de aplicación de defensa de competencia tiene el deber de informar al denunciante el ente que controla la respectiva matrícula de la actividad profesional, a efectos de informar al usuario del servicio dónde debe recurrir y cuál es el ente competente para hacerlo.

La ley preveía, y nosotros lo hemos mantenido, el *in dubio pro* consumidor o usuario. Esto significa que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalece la más favorable al consumidor.

El proyecto de esta Cámara trabaja sobre el ámbito de los servicios públicos domiciliarios. Al respecto, hay un aporte muy importante y significativo que ha hecho el Senado, toda vez que establece en el artículo 10 la modificación del artículo 25 de la ley para que en caso de duda sobre la normativa aplicable deberá aplicarse la más favorable para el consumidor. Esto va en sintonía con las disposiciones del artículo 42 y con las modificaciones del artículo 5º.

En realidad, nosotros estamos haciendo una interpretación en sintonía con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que prevé los derechos de información adecuada y veraz para usuarios. Concretamente, fue el señor senador Jenefes quien hizo un aporte sobre esto al traer a colación un tema que, indudablemente, se pudo visualizar en las provincias del interior con repetida y lamentable frecuencia: el trato discriminatorio en hoteles, en servicios turísticos o en el transporte aéreo que recibían los ciudadanos extranjeros por la sola condición de tener una moneda más fuerte o una condición de extranjería. Esa incorporación fue obra del trabajo del Senado de la Nación, y así se determinó que se prohíbe para proveedores de bienes y servicios establecer diferencias entre consumidores nacionales y extranjeros, salvo excepciones previstas por la autoridad de aplicación por razones de interés general.

En realidad, con esta incorporación estamos defendiendo una profusa actividad, como es la turística, porque la falta de cobertura de este tipo de situaciones había generado abusos y la desigualdad de trato repercutía y sigue repercutiendo negativamente en la imagen de nuestro país, afectando seriamente la actividad turística. Por lo tanto, este también es un logro de este Senado.

Además, con la sanción de esta norma estamos dando protección especial y directa a la efectiva vigencia de un derecho de raigambre constitucional, como es el de otorgar a los consumidores y a los usuarios condiciones de trato digno y equitativo, con lo cual no esta-

mos más que haciéndonos eco de una manda constitucional.

En el artículo 4º del proyecto se incluyen los objetos de la Ley de Operaciones de Ventas de Inmuebles y Muebles, sean Nuevos o Usados. En este punto se planteó una discusión porque la operatoria de venta de inmuebles está reglada por el Código Civil. Entendimos que para la protección del sistema de ventas de inmuebles debíamos abordar concretamente el problema de comercialización vía Internet, vía medios de alta tecnología, una problemática que algunas inmobiliarias traían aparejado para los usuarios. Por eso me parece que esta incorporación es buena.

En el artículo 11, en otra incorporación del Senado con relación a la sanción de la Cámara de Diputados, establecimos la obligación de las empresas prestadoras de tener un registro de reclamos y que garanticen la atención personalizada de los usuarios. Esta disposición, repito, no la contempla la Cámara de Diputados, lo cual fue motivo de una fuerte discusión que tuvo que ver con cuestiones que todo el mundo conoce como problemáticas.

Muchas de las prestadoras de servicios, en honor y en aras de abaratar costos, habían cerrado sus oficinas de atención al público y el usuario del interior podía hacer los reclamos ante una cabina telefónica, que generalmente lo comunicaba con una máquina que no le daba ningún tipo de respuesta. Esto generó muchísimos reclamos. Entonces, en esta modificación el Senado incorpora la obligación de la creación de un registro de reclamos y la apertura de oficinas, que puede ser complementado con el sistema de atención telefónica, pero dicho sistema no puede reemplazar la atención personalizada en una oficina en donde el usuario tenga una justa atención por el servicio que paga, que a veces no está en sintonía con lo que le cuesta.

El artículo 12 del proyecto habla de los servicios públicos. En buena medida responde a la inquietud de todos los usuarios de servicios públicos, porque establece un procedimiento de protección a usuarios frente a la mala o errónea facturación. La verdad es que la redacción trae dos hallazgos importantes. El usuario se libera pagando el consumo que históricamente pagó y se invierte la carga de la prueba. Deberá ser la empresa la que acredite el mayor consumo.

En los supuestos en que el usuario pague más por el servicio de lo que consumió, está a cargo de la empresa restituir ese importe con más una tasa de actualización que justifique el perjuicio generado.

Se establece un límite a los intereses que recarguen el retardo material en el cumplimiento de la obligación, esto es, la mora. Actualmente, hay un uso absolutamente abusivo de las tasas de actualización por parte de las empresas de servicios públicos. El proyecto de ley aborda esa materia estableciendo límites en la posibilidad de incorporar sistemas de actualización: no podrá superar el 50 por ciento de la tasa pasiva para depósitos a treinta días del Banco Nación.

En el artículo 13 se amplía el concepto de venta domiciliaria.

En el artículo 14, también incorporado por el Senado de la Nación, se amplía a diez días el plazo durante el cual el consumidor puede revocar la aceptación de la venta domiciliaria que estaba previsto en siete días y en la ley originaria, en cinco.

El artículo 15 del proyecto prevé, justamente, la modificación del artículo 36, estableciendo el derecho del consumidor de demandar la nulidad de un contrato o de algunas de sus cláusulas en operaciones financieras. Acá se planteó efectivamente una discusión, que la quiero poner en valor.

El proyecto tal cual venía de la Cámara de Diputados establecía la nulidad de cualquier cláusula que vulnerara lo reglado por esta ley que protege al usuario y consumidor, y abarcaba las operaciones financieras en su totalidad. Eso, no sólo nos iba a colocar en una difícil situación, que era ponerle condiciones absolutamente contrarias a las directivas que regla el Banco Central sobre entidades financieras, sino que, además, por excedernos en la protección íbamos a sacar del sistema financiero a los usuarios que pretendíamos proteger, porque a ese sector nadie le iba a facilitar un solo préstamo.

Entonces, hemos tratado de acordar una redacción —Liliana recién decía que, a lo mejor, no está del todo consensuada— que exclusivamente limita el ámbito de actuación a las operaciones financieras y de crédito para consumo, sabiendo que esta redacción después va a tener que ser reglamentada minuciosamente por el Poder

Ejecutivo. Sin embargo, no podíamos dejar de reglar este tipo de operaciones porque, en definitiva, es uno de los objetivos del proyecto de ley, y bienvenido que así sea.

Este mismo artículo, para este tipo de operaciones, prevé que el otorgamiento de créditos para un tercero queda condicionado a la efectiva consecución del mismo, siendo nulo cualquier tipo de pacto, cuota o comisión en el supuesto de que la misma no tenga un resultado positivo.

Finalmente, hay otra incorporación hecha por el Senado de la Nación al proyecto en revisión. La Cámara de Diputados definía el daño directo y nosotros entendíamos que tenía buenas intenciones. Sin embargo, la no tipificación del daño directo, la no conceptualización de lo que definíamos como daño directo iba a arrojar, indudablemente, la lógica declaración de inconstitucionalidad.

Por eso, la Cámara de Senadores define el daño directo como todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria ocasionada de manera inmediata sobre los bienes o sobre las personas como consecuencia de la acción u omisión de proveedores de bienes o de prestadores de servicios.

Este artículo, que parece menor, no lo es, porque le permite a la autoridad administrativa determinar la existencia de un daño directo a usuarios y consumidores resultantes de la infracción del proveedor. En realidad, estamos hablando de los usuarios y consumidores que por la escasa importancia del contrato, si no legislamos el daño directo, los perjuicios se generan en forma escalonada y repetida y nunca hay reparación para ellos. Me refiero a los usuarios y consumidores, por ejemplo, de tarjetas telefónicas o de algún servicio de menor cuantía, que no recurren nunca a la vía judicial y que son objeto de abusos de algunos proveedores inescrupulosos. El daño directo está reglado con esa finalidad.

Respecto del artículo 21 del proyecto, también es importante el aporte del Senado de la Nación, que algunos diarios han pretendido minimizar, porque esa redacción originaria preveía un monto fijo en dinero y un sistema de actualización. Como consecuencia de la vigencia del artículo 10 de la ley 23.928, de convertibilidad, está prohibida la indexación en

la República Argentina, entonces adecuamos a ese sistema una metodología que nos permita un importe máximo y ajustable.

Encontramos una redacción que nos pareció absolutamente lógica y en la misma sintonía que tenía el proyecto original, estableciendo como criterio objetivo de la determinación del importe máximo en concepto de resarcimiento el valor máximo de cinco canastas básicas totales para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, INDEC. Por ello, tenemos un valor de actualización permanente para este tipo de perjuicios.

El artículo 21 del proyecto preveía un sistema de actualización que, como dije, por el mismo concepto de la vigencia de la Ley de Convertibilidad, hemos eliminado; en el artículo 25, la Cámara de Senadores incorpora la figura del daño punitivo.

El artículo 26 establece la posibilidad de que el juez, a pedido de parte —por resolución fundada, basándose en la complejidad de la problemática que aborda—, pueda elegir un procedimiento de conocimiento más amplio. Esto indica que no siempre los procedimientos de conocimiento abreviados son los que garantizan el verdadero derecho de defensa de las partes; y, entonces, cuando esto se pueda llegar a vulnerar está a criterio del juez ampliar el procedimiento de conocimiento.

El artículo 27, que modifica al artículo 54, prevé la acción de incidencia colectiva. Aquí, en realidad, debemos decir que lo lógico y lo ideal hubiera sido una redacción pormenorizada que permita el abordaje limitativo de las acciones de incidencia colectiva o de las acciones de clase.

Sin duda, este asunto lo deberíamos tener en mente para plantearlo en un proyecto de ley específico y dar así un tratamiento complejo y completo al tema de la incidencia colectiva. En ese sentido, si dejábamos la redacción original tal como venía, generábamos un complejo universo en el cual iban a multiplicarse las demandas y los juicios frente a una misma situación de conflicto. Entonces, se ha encontrado una redacción que sé que no es absolutamente abarcativa de la problemática de la acción de incidencia colectiva; no obstante, hemos asumido el compromiso de elaborar al respecto un

proyecto que está en tratamiento en el Senado, a fin de que contemple este asunto en forma general y completa. De alguna manera, esta nueva redacción logró el consenso de la gran mayoría, que es uno de los aspectos que bien señalaba la senadora Liliana Negre de Alonso. No pretendimos encontrar un consenso definitivo sobre el particular —y, en verdad, quedamos a mitad de camino, aunque las mayorías fueron casi totales—, pero reconozco que el abordaje posterior nos permitirá resolver esta cuestión y, efectivamente, hemos asumido el compromiso de tratarlo.

El artículo 63 de la ley 24.240 actualmente¹⁸ establece que para los contratos de transporte aéreo se aplicará la Ley de Defensa de la Competencia. Esto es muy importante, fundamentalmente en momentos como los que vive la República Argentina, donde el transporte aéreo es motivo de miles de reclamos, de miles de abusos y de indefensión del usuario. Considero fundamental que hoy estemos tratando este proyecto porque lo lógico y lo ideal sería que, remitido a la Cámara de Diputados, pueda obtener la aprobación que requiere, pues aquí le estamos introduciendo modificaciones. Sería primordial que los usuarios tuvieran, frente a un proceso que se avecina como importante y de mucho movimiento de pasajeros, una herramienta que les permita poner coto a los abusos que, efectivamente, cometen las líneas aéreas con respecto a infinidad de problemas que el 90 por ciento de los senadores, que son del interior del país, conocen en profundidad.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José J. B. Pampuro.

Sr. Fernández. — Para cerrar —porque hay otros senadores que trabajaron fuertemente y que aportarán conceptos sobre el particular—, me resta reconocer el trabajo de la secretaria y de los asesores de la Comisión de Legislación General, la que he tenido el privilegio de presidir hasta hace poco tiempo. Creo que el aporte brindado por los distintos senadores de esa comisión ha permitido parir hoy —si se me permite utilizar ese término— un proyecto de ley que habla a las claras de la profesionalidad y de la seriedad con que ha trabajado el Senado en el tratamiento de esta norma. En efecto, la sana y buena intención de la Cámara de Diputados están salvadas con

una prolija redacción que modifica algunos errores importantes —yo diría groseros— que tenía su redacción original.

Me resta, entonces, reconocer absolutamente toda la labor de los senadores que han participado de modo activo en la redacción de este proyecto. Y, obviamente, también la actitud que ha tenido la gente de Derechos y Garantías, que ha aceptado la gran cantidad de modificaciones que tienen que ver con la técnica de redacción. Estoy hablando de la comisión que presidía y que seguramente presidirá el senador Petcoff Naidenoff.

Por lo demás, acerca de los aspectos honrados de la participación del Senado, sería importante que algunos comentaristas periodísticos efectúen una profusa lectura de lo que teníamos y de lo que hemos logrado para que, alguna vez, sobre el particular se diga la verdad y se le dé valor al trabajo del Senado de la Nación. Van a ver, de su profusa lectura que, si existieron lobbies no se notan para nada en la redacción de este artículo que está en favor de los consumidores, compromiso que asumimos y cumplimos acabadamente.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: creo que el miembro informante, a quien le tocara presidir la Comisión de Legislación General, fue muy claro en cuanto al arduo trabajo realizado en el ámbito de las comisiones de Derechos y Garantías, de Legislación General y de Industria y Comercio, en el Senado de la Nación.

Me parece que lo que hoy estamos tratando no es un tema menor. Se trata de la reforma integral a la ley 24.240, sancionada en 1993. Estamos considerando varios proyectos de señores senadores, que fueron analizados en las respectivas comisiones, algunos de los cuales hemos tenido a la vista y que se incorporaron a último momento. La redacción de la sanción de Diputados es una modificación prácticamente integral, de 35 artículos.

Este Senado se ha tomado su tiempo, pero con un criterio lógico y razonable. En primer lugar, quiero manifestar que se llevaron a cabo catorce reuniones, entre plenarios de las respectivas comisiones y las reuniones de asesores, para

bosquejar este borrador de dictamen —cuando, en realidad, existía prácticamente consenso mayoritario, se produjo la renovación de los miembros—, con el objeto de lograr una ley que armonice con los mejores criterios, que contemple la propia dinámica en el marco de las relaciones de consumo que se habían venido dando desde 1993 hasta la fecha y que, por un vacío legal, en diferentes instancias generaron un verdadero estado no solamente de insatisfacción sino de abandono por parte de la inmensa mayoría de usuarios y consumidores.

Quiero destacar, fundamentalmente, el trabajo de asesores. Voy a hacer un abordaje en general porque, en particular, hay algunos artículos respecto de los que lastimosamente tenemos diferencias, para los cuales voy a plantear algunas modificaciones concretas que tienen que ver con el beneficio de la gratuidad. Pero, antes que nada, quiero señalar —como lo ha explicado el senador Fernández— que esta es una ley que tiene por objeto la defensa integral de los consumidores y de los usuarios, y que define en el artículo 1º a los usuarios y consumidores, entendiendo como tales a todas aquellas personas de naturaleza pública o privada que adquieren o utilizan bienes o servicios en beneficio propio, de su grupo familiar o social.

La primera gran incorporación sobre la que trabajamos, en el transcurso de 2006 y 2007 en el Senado de la Nación, y que no contemplaba el C.D.-65/06, es la adquisición de derechos de tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y otras figuras afines. Este era un vacío que tenía la sanción de Diputados. Nosotros lo hemos tratado porque se refiere a nuevos derechos y a situaciones que han generado un sinnúmero de abusos, inclusive la sanción de leyes, como la de tiempo compartido, que trató este Senado de la Nación.

Me parece importante la definición y la conceptualización de la relación de consumo que, originariamente, no contemplaba la ley 24.240. Y se define la relación de consumo como el vínculo jurídico entre proveedor, usuario y consumidor. También se establece el marco de las relaciones de consumo, que se dan desde la cotidianidad, fundamentalmente el principio de integración, de integralidad normativa. Esto es, que la ley 24.240 ha dejado de tener el criterio supletorio que se daba en materia de servicios

públicos, de transporte aéreo, que muchas veces posibilitaba la comisión concreta de abusos o que esta ley llegara a destiempo del reclamo concreto de la gente. Porque cuando hablamos de una ley de estas características nos referimos a los derechos de la gente; a la vulneración de los derechos que en lo cotidiano, que, más de una vez, se han consolidado ante el vacío al que estamos haciendo referencia.

A través del artículo 2º, no solamente incorporamos una definición del proveedor, sino que marcamos una diferencia con la sanción de la Cámara de Diputados, al excluir a los servicios de las profesiones liberales, al amparo de la ley 24.240.

A continuación, quiero detenerme en la razón de la decisión de los señores senadores de excluir la ley 24.240, de protección y defensa de los consumidores. En ese sentido, quiero destacar el plenario llevado a cabo en 2006, del que participaron más de veinticinco o treinta asociaciones de colegios profesionales y asociaciones de defensa del consumidor. Allí, la opinión mayoritaria no sólo de las partes, sino, fundamentalmente, del trabajo y del consenso surgido fue que los profesionales liberales que requieren para su ejercicio un título universitario y una matrícula expedida por los colegios profesionales no pueden estar abarcados por el concepto de usuario y consumidor. En primer lugar, porque más allá de prestar un servicio, el que presta un profesional liberal con título universitario y matrícula no puede ser asemejado al concepto de un proveedor. El profesional presta un servicio, pero no se corresponde con la conceptualización del proveedor, o lo que implica un proveedor, que comercializa bienes y servicios, bajo el contexto de la ley 24.240. En segundo lugar, en cuanto a las obligaciones, las que se generan a través del proveedor son de resultados. En cambio, las que prestan los profesionales liberales son de medios. Esta no es una definición menor, sino que va a marcar una pauta, en función de la cual consideramos que esta exclusión es un aporte significativo y que pone claros sobre oscuros. Creo que cuando se considere en Cámara de Diputados tendrá el acompañamiento respectivo.

Los profesionales liberales no son proveedores. Esto lo quiero repetir. En definitiva, un profesional liberal no es un agente de mercado

ni económico, sino más bien un agente social. Y la renta que hoy se obtiene en el marco de una relación comercial o empresarial tiene una finalidad o cierra un circuito absolutamente productivo, que nada tiene que ver con la prestación que se recibe a través de los honorarios profesionales, los cuales tienen un carácter alimentario.

Por otra parte, con relación a los servicios de las profesiones liberales, también excluimos el artículo 15 de la ley 24.240; mejor dicho, del dictamen de la sanción de la Cámara de Diputados, que establecía la responsabilidad por el factor subjetivo o culpa de los profesionales liberales. Al no contemplarlos en la ley, excluimos el factor subjetivo o culpa como factor de atribución de responsabilidad. Entonces, se los excluye por la sencilla razón de que dichos profesionales se rigen por normas específicas, es decir, por un poder disciplinario interno de matrícula que ejercen los propios colegios profesionales. Ello tiene que ver, muchas veces, con colegios profesionales que funcionan con ciertas pautas que están establecidas en la Ciudad de Buenos Aires o en las propias provincias, que son materias concretas reservadas ellas y que no fueron delegadas al poder central.

Quiero detenerme un poco más en aclarar la razón de la exclusión de los servicios de profesiones liberales. En realidad, me parece que hubo claridad en señalar las bondades de la ley en diferentes aspectos. Pero no quiero dejar pasar por alto la necesidad de garantizar^{sa} a usuarios y consumidores una información gratuita, proporcionada con tal claridad que permita su comprensión. Garantizamos el derecho a la información en la etapa precontractual, es decir, en la etapa previa a la comercialización. Este vacío, más de una vez, había posibilitado la concreción de abusos en esta materia. Por eso, incorporamos el artículo 8º bis, para el trato digno, a fin de plasmar una garantía constitucional —que establece el artículo 42—. Porque la Ley de Defensa del Consumidor se sancionó en 1993, pero en 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se han plasmado nuevos derechos y garantías. Es a partir de aquí donde ha quedado plasmada una fuerte impronta respecto de la problemática de usuarios y consumidores —artículo 42— y de las acciones de incidencia colectiva —artículo 43—. Creo que tratamos de

cubrir determinados aspectos que son importantes y que —repito— se dan en lo cotidiano.

Cuando decimos que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y tratos dignos y equitativos a los usuarios, estamos garantizando esa atención que muchas veces no se da. Muchas veces, se da la remisión de intimaciones que tienen apariencia judicial, cuando, en realidad, no lo son y se encubre una práctica maliciosa desvirtúa el propio espíritu de tutelar que contempla la ley 24.240.

Nos pareció importante el aporte del senador Jenefer. Originariamente, en uno de los proyectos que presentó y que fue tratado en la Comisión de Derechos y Garantías, incorporaba el hecho de que se evite todo tipo de discriminación respecto de productos, bienes o servicios que se ofrecen a los consumidores extranjeros. Es decir, se trata de evitar la diferenciación sobre precios y calidades técnicas de estos productos. Incorporamos este concepto en el artículo 8 bis, a sugerencia del propio senador; nos parece mucho más adecuado. Esto fue contemplado por la Comisión de Legislación General y, también, por el plenario de Industria y Comercio y la Comisión de Derechos y Garantías.

Toda conducta abusiva —cuando no se da cumplimiento al trato digno— también puede ser pasible de las multas que se prevén en el artículo 47. Cuando hablamos de multas, nos referimos a acciones concretas que pueden ir desde un apercibimiento hasta una sanción económica de 100 pesos o de 5 millones de pesos, ser graduadas en función de la gravedad. La gran diferencia que tenemos con Diputados en cuanto a las sanciones es que no hacemos una enumeración taxativa de cuáles son las infracciones que pueden generarlas. Más bien, dejamos a libre criterio que pueda puntualizarse que, ante alguna conducta indigna, se concrete la sanción en la práctica.

Al artículo 8° de este dictamen incorporamos el artículo 10 ter, que tiene que ver con los modos de rescisión. Esto es importante, porque se genera la igualdad o paridad de contratación. Si un ciudadano contrata un servicio por correo o por teléfono, tiene la posibilidad de rescindir por el mismo modo que lo ha contratado. Esto no estaba contemplado en la ley 24.240; fue producto del consenso y del trabajo que ha realizado el Senado de la Nación.

En cuanto a las garantías, es un capítulo interesante. En primer lugar, porque se establecen las garantías para los sucesivos adquirentes. Se establece una diferenciación de cosas muebles usadas respecto de las que no lo son. La garantía es de tres meses; en los restantes casos, es de seis meses, salvo que se establezca un plazo mayor o lo contemple la ley. Al respecto, estamos refiriéndonos a que avanzamos en el aspecto tutelar. Siempre, en caso de duda, se considerará la interpretación más favorable para el consumidor. Estos son los aspectos que se trataron de salvaguardar en el marco del tratamiento realizado en las comisiones respectivas.

En el artículo 10 de este proyecto, sustituimos parcialmente el artículo 25 de la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene que ver con las empresas prestatarias de servicios públicos. Se ha realizado una reforma que es una modificación importante: los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación es controlada por los correspondientes organismos serán regidos por esas normas y por esta ley. El artículo 25 de la ley 24.240, en su redacción originaria, establecía la aplicación supletoria de esta ley para los servicios públicos con prestaciones de servicios domiciliarios. Se ha eliminado la supletoriedad. Esto es un gran avance y un gran aporte en beneficio de la gente: por sus propias características, al aplicarse esta ley de manera supletoria, impedía la concreción material de derechos que estaban garantizados en la ley pero que no se podían plasmar por la propia supletoriedad.

El senador preopinante fue muy claro cuando hablaba de los registros de reclamos. Esta es una incorporación del Senado de la Nación. Tomamos como antecedente un expediente de 2005 de la señora senadora Müller, que establecía un registro de reclamos y la atención personalizada, lo que también fue plasmado en la sanción de Diputados. En el artículo 12 de este borrador, sustituimos en parte el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor. Establecimos una diferencia en relación con la sanción de Diputados, pues si bien ésta establecía un procedimiento para regular la materia cuando una empresa prestataria de servicios públicos sobrefacturara o pretendiera el cobro de facturas indebidas o que ya habían sido abonadas por los usuarios,

dejaba abierto a un error de interpretación los supuestos de errores de facturación.

Al respecto, volvemos al texto original de la ley 24.240 y establecemos claramente que cuando una empresa de servicios públicos con variaciones regulares estacionales facture en un período servicios que excedan el 75 por ciento de los consumos que se registraron en los dos años anteriores, se presume que existe error en la facturación. De la misma manera, para los servicios públicos no estacionales, se toman como parámetros los consumos efectuados en los últimos doce meses. Esto no lo contemplaba el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados; por eso —reitero— rescatamos la ley 24.240, pues nos pareció un criterio mucho más práctico.

En primer lugar, se establece un estándar. Es decir, 75 por ciento de error en la facturación —o sobrefacturación— promedio de los consumos registrados con una anterioridad de 24 meses; entonces, se presume el error en la facturación. Y se modifica el procedimiento: el usuario tiene la posibilidad de reclamar ante la empresa. Esta tiene un plazo de treinta días para expedirse y, si no se expide o si la respuesta es insatisfactoria a la pretensión del usuario o consumidor, éste puede acudir ante el ente regulador o a las autoridades competentes, para plantear a través de un recurso su pretensión.

También, se establece con mucha fuerza el principio de integración normativa, rescatando que estos servicios públicos domiciliarios, más allá de la legislación concreta o específica, deben regirse por la ley 24.240. Repito: así como se modificaron 35 artículos de la ley 24.240 a través del proyecto sancionado por Diputados, estamos ante cuestiones que se trataron en las catorce reuniones que se llevaron a cabo en el Senado de la Nación. No fue un trabajo menor, porque participaron asociaciones y colegios profesionales. Asimismo, hubo un gran trabajo de parte de los asesores, quienes posibilitaron, con el aporte de los senadores, la concreción de una ley que le sirva más a la gente.

Nos parece importante el caso de la venta domiciliaria. Al respecto, incorporamos que la venta domiciliaria es la oferta y, también, la propuesta de venta efectuada al usuario o al consumidor fuera del domicilio del proveedor. Con relación a estas ventas domiciliarias,

contemplamos las que se efectúan a través de una convocatoria. Son muy usuales las convocatorias que se celebran por llamados telefónicos para concurrir a un determinado lugar. Nos encontramos con que existe disparidad o no hay una coincidencia entre el producto supuestamente ofrecido y el objeto o motivo de la contratación. Por lo tanto, esta situación también se contemplada. Del proyecto sancionado por Diputados, algunas propuestas fueron receptadas y otras modificadas. Por ejemplo, el contrato debe ser instrumentado por escrito; esta es una propuesta concreta de los integrantes de la Comisión de Legislación General.

El tema de las operaciones financieras es una cuestión que, seguramente, será discutida. Pero lo que se dejó en claro con nuestra redacción es que las operaciones financieras que están reguladas en el marco de la ley 24.240 son las destinadas a consumo y a crédito para consumo, salvándose, justamente, un aspecto que nos parece importante. Es decir, no se puede dejar al margen de la ley a usuarios y consumidores de operaciones financieras o de los abusos que se dan en operaciones financieras en lo cotidiano. Por eso, cuando establecemos que en este tipo de operaciones se debe consignar el precio de contado, el saldo de la deuda, el total de los intereses a pagar, las amortizaciones y el sistema y los gastos extras o adicionales si los hubiere, damos certidumbre a la parte más débil de la relación, ya que hay una disparidad de relaciones entre los usuarios y consumidores y las empresas prestatarias o el proveedor o comercializador de ciertos productos o servicios. En la falta de estas cosas durante estos años es que se ha dado este estado de indefensión y vacío legal que, de esta manera, queda totalmente suplido.

Incorporamos el daño directo y el daño punitivo, dos conceptos que no estaban conceptualizados en el marco de la ley 24.240. El daño directo fue muy discutido, lo dijo muy bien el senador preopinante. Lo que hemos hecho para tratar de evitar cualquier tipo de acciones judiciales que puedan contrarrestar los efectos que queremos implementar con el artículo en cuestión es una conceptualización: todo perjuicio o menoscabo en la persona o bienes del usuario o consumidor como consecuencia de la acción u omisión del proveedor del bien o del prestador del servicio. Ahora bien, ¿por qué establecemos

que la autoridad administrativa o la autoridad de aplicación puede fijar un daño directo y lo determinamos en un importe de cinco canastas básicas totales del hogar, definidas por el INDEC? Por una cuestión práctica.

La realidad nos indica que la inmensa mayoría de los usuarios y consumidores que concurren ante los entes reguladores o ante la autoridad administrativa de aplicación a reclamar por la violación concreta del derecho de parte del proveedor o prestador de un servicio, muchas veces, no ve satisfecha su pretensión. Hay violación concreta de un derecho, pero como muchas veces los montos o el perjuicio o el menoscabo concreto son de poca significación, lo que se da en la práctica es el accionar contrario a derecho de una empresa prestataria de servicios públicos o de un proveedor y un particular damnificado, que no concreta en la práctica su pretensión. Es por esta razón que nos parece adecuado que la autoridad de aplicación fije este daño directo. Es decir, evaluando el daño concreto, que lo fije en el importe de cinco canastas básicas totales del hogar, según la definición del INDEC y, además, fijando que como el usuario o consumidor tiene el derecho de acudir en sede judicial para salvaguardar su derecho, él pueda ser deducible de las futuras acciones judiciales. Esta es una incorporación importante que debe ser sostenida y, más allá de las discusiones que pudieron suscitarse en ese sentido, me parece que la experiencia práctica nos indica que es un aporte valioso.

Sr. Presidente (Pampuro). — Le solicita una interrupción el señor senador Pichetto, ¿la concede?

Sr. Petcoff Naidenoff. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: hay quórum para votar el cierre de la lista de oradores y, de paso, estimar el horario de la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). — Se va a dar lectura a la lista de oradores.

Están anotados los señores senadores Escudero, Giustiniani, Jeneffes y Negre de Alonso. Si hay asentimiento, se va a cerrar la lista de oradores.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). — Queda cerrada la lista de oradores.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Nos parece un aporte significativo —hecho que se ha discutido mucho y se ha omitido— el tema de la prescripción.

Existían diferentes interpretaciones sobre la cuestión. La Cámara I de la Capital Federal establecía el criterio de que para los vicios rebitorios en materia de inmuebles no regía la prescripción por el plazo de tres años. Dejamos en claro esta cuestión y fijamos un plazo de prescripción de tres años para las acciones judiciales y administrativas y sanciones emergentes.

En el capítulo de las acciones judiciales, garantizamos el acceso a la justicia para los usuarios y los consumidores que fueron vulnerados en un derecho subjetivo. También lo hacemos para las asociaciones con personería jurídica reconocida conforme la reglamentación vigente en la materia y para el defensor y el Ministerio Público. Creo que nosotros tenemos que garantizar el beneficio de gratuidad para los usuarios y consumidores. Pero eso lo trataremos cuando realicemos la consideración en particular, con las disidencias que se puedan suscitar.

El daño punitivo, que fue explicado con claridad también por el senador preopinante, es una multa civil que tiene su antecedente en el derecho anglosajón. En los Estados Unidos y en España fue un medio eficaz para precaver los propios daños. Establece un mecanismo de aplicación de una multa que incorporamos en el artículo 52 bis, capítulo "De las acciones judiciales", porque únicamente se puede materializar o concretar esta multa civil a pedido de parte. Esta es la gran diferencia con la sanción de Diputados.

En el capítulo "De las acciones de incidencia colectiva", este borrador de predictamen es muy claro. A las acciones de incidencia colectiva les damos cumplimiento con el propio rango que establece la Constitución a partir de la reforma de 1994. Se establece únicamente que para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción en las acciones de incidencia colectiva se debe correr vista al Ministerio Público, que debe prestar su conformidad en tanto y en cuanto no actúe como accionante o como titular de la acción para

reclamar un derecho concreto. Me parece que se trata de modificaciones importantes.

También lo son las disposiciones complementarias; cuando sustituimos el artículo 50, en materia de la ley 25.065, de tarjetas de crédito, y dejamos muy en claro cuáles son las autoridades de aplicación: el Banco Central, en materia financiera, y la autoridad de aplicación nacional o provincial, en materias comerciales que tienen que ver con los reclamos mayoritarios que se interponen por parte de los usuarios y consumidores.

Esta es una síntesis lo más acabada posible de lo que hemos incorporado como modificación a estos 35 artículos. También, de lo que incorporamos en función del propio proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Creo que no quedan dudas de que lo que se ha hecho es garantizar o profundizar la protección de usuarios y consumidores, que son la parte más débil en la relación, en el marco de la ley 24.240. Son innumerables los casos de usuarios y consumidores que fueron vulnerados en sus derechos por sobrefacturaciones y en el marco de operaciones financieras. Creo que con esta ley venimos a cubrir un vacío que va a ser en beneficio de la propia gente.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Sonia Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: este es uno de los proyectos que voy a votar con más satisfacción. De hecho, me parece que es el proyecto que va a generar más beneficios a toda la población de la Argentina.

La situación de la sociedad de consumo empieza a aparecer como un concepto del siglo XX, cuando comienza la producción masiva de bienes y servicios. Entonces, promediando el siglo XX, se advierte que las reglas de mercado no son suficientes para proteger los derechos de usuarios y consumidores y, también, que los derechos de usuarios y consumidores tienen un interés colectivo. Por eso, aparece esta necesidad de defensa de derechos de usuarios y consumidores dentro de un ámbito específico que no estaba previsto originariamente y que busca compensar las injusticias que genera el mercado.

En nuestro país, como se dijo, se aborda una ley de defensa de usuarios y consumidores

en 1993. Se aborda desde el punto de vista contractualista: usuarios y consumidores son quienes adquieren bienes a título oneroso. Al año siguiente, en 1994, el artículo 42 de la Constitución reformada plasma los derechos de usuarios y consumidores. Esta es la primera vez, después de 1994, que vamos a hacer una revisión integral de esta ley. Lo más importante en el abordaje es que ya no tiene una visión contractualista. Aquí, aparece un ámbito de aplicación nuevo: la relación de consumo, que separa de la fuente. La fuente de esa relación de consumo podrá ser un contrato, podrá ser un acto administrativo, podrá ser un acto o un hecho ilícito.

Campea a lo largo de toda esta reforma el derecho a la información como algo básico de la protección de los derechos de usuarios y consumidores, la información que busca el propio usuario o consumidor cuando va a adquirir un bien o servicio y que analiza qué es lo que quiere consumir; pero, además, la obligación del proveedor de dar la información correcta y completa y, por primera vez, sanciones con penas de nulidad del contrato, cuando el proveedor omite dar ese tipo de información.

También establecemos que el proveedor está obligado a dar gratuitamente toda esta información a usuarios y consumidores y, a la vez, hay una interesante ampliación de los plazos de prescripción, de garantías —cuando se adquieren bienes mueble— y de reflexión.

Aquí ya se habló de lo que es la venta domiciliaria. Pues bien, nosotros ampliamos el concepto de venta domiciliaria. Así, venta domiciliaria es toda venta que se hace fuera del establecimiento del vendedor o aun cuando sea allí pero el consumidor fue convocado para alguna otra cuestión. Por ejemplo, cuando se lo invita a un concurso o sorteo y ahí aparecen dos personalidades: el vendedor, que está muy bien entrenado, y el consumidor que, en realidad, no iba a consumir y, entonces, no está preparado. En esos casos ampliamos de cinco a diez días el plazo de reflexión que tendrá ese consumidor, que se vio presionado a adquirir algo, para decidir que, en realidad, no quiere ese producto.

Con relación a la información, lo más importante es lo que planteamos en el artículo 15: la protección de los usuarios de servicios financieros. En este sentido, la economía clásica

sica establece la importancia de contar con la información correcta. Joseph Stiglitz, a quien conocemos bastante en la Argentina, se ha ganado un Premio Nobel por analizar, justamente, el rol de la información asimétrica en las crisis. O sea, es muy importante que la información no sea asimétrica, sino completa y total, para evitar crisis.

Eso es lo que vivimos en la Argentina: cuando una persona va a tomar un crédito, un préstamo, necesita saber exactamente todas las condiciones a que se obliga, cuál es la tasa de interés, cuáles son los plazos de amortización de capital, cómo se devuelven los intereses, etcétera; o sea, la información completa. Porque cuando no la tiene no sólo se perjudica el usuario sino las instituciones de crédito, porque terminan con una cartera incobrable, y también el Estado, porque en esos casos se ve presionado a salir en salvataje de esos usuarios y consumidores.

Otro de los temas muy importante de esta reforma es la cuestión de las acciones de incidencia colectiva. Estas acciones han sido incorporadas en el artículo 43 de la Constitución y, lamentablemente, todavía no tenemos una regulación de ellas. En el tratamiento en particular voy a plantear modificaciones a la redacción de la información de las operaciones financieras y de las acciones de incidencia colectiva.

Nosotros debemos ser lo más claro posible en las acciones de incidencia colectiva para tratar, justamente, de preservar los derechos de usuarios y consumidores. Debemos conceptualizar quiénes van a ser los legitimados y cuáles son las acciones de incidencia colectiva, las situaciones de litispendencia y de conexión y los efectos de la cosa juzgada, porque quienes buscan reducir el universo de las acciones colectivas están planteando que cuando se trata de muchas acciones individuales, estas no son de incidencia colectiva o que tampoco se podrían reclamar devoluciones, restituciones de dinero o daños y perjuicios a través de este tipo de acciones colectivas.

Quiero hacer referencia también a la cuestión de las competencias: cada vez que debatimos en este Congreso aparece el tema de la competencia y la determinación de si tal o cual cosa es de competencia nacional o provincial. Yo entiendo que es competencia del Congreso de la Nación legislar en esta materia, pero las provincias tie-

nen también su propia competencia en materia de control y juzgamiento.

Finalmente, en cuanto a normas del proceso, tenemos dos modificaciones importantes. En primer lugar, establecemos que el proceso de conocimiento más abreviado es el que corresponde, pero permitimos que, a pedido de parte, el juez, por resolución fundada, y atendiendo a la complejidad del proceso, pueda determinar otro tipo de conocimiento un poco más adecuado para las pruebas.

También se incorpora el principio de las cargas dinámicas de las pruebas, que es muy importante, como lo decía el senador Naidenoff, con motivo de la sobrefacturación. Cuando la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios emite una factura que excede en un 75 por ciento el consumo habitual, se presume que hay error en la facturación; entonces, se invierte la carga de la prueba. Lo que establecemos en el proyecto de ley es que quien está en condiciones de tener la información está obligado a presentar ante el juez toda la información.

Un tema bastante discutible es el daño directo a través de la autoridad administrativa. Apoyamos esta situación porque creemos que tiene soporte constitucional en lo que establece el artículo 42. Una justicia tardía no es justicia. Por eso nos parece que una reparación inmediata en el ámbito administrativo es importante y realmente protege los derechos de usuarios y consumidores. Pero esto va a abrir la discusión sobre la necesidad de implementar en nuestro país juzgados de menor cuantía.

Hay otro tema muy importante que es la necesidad de educar al consumidor argentino. Sucede que el consumidor argentino no conoce cuáles son sus derechos. Por lo tanto, no tiene la percepción del potencial que tiene con su decisión de adquirir o no. Junto con la difusión y la educación del consumidor en cuanto a sus derechos, me parece que hay que generar un gran debate en la educación para el consumo, o sea, que ésta no sea una sociedad de consumo donde consumir equivalga a ser, sino que realmente busquemos una sociedad mucho más ética, más participativa y más igualitaria.

Este es uno de los proyectos en los que he trabajado con mayor gusto.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: comparto lo que hasta aquí se dijo por parte de las senadoras y senadores preopinantes. Adelanto mi voto afirmativo en general. Las muy buenas participaciones del miembro informante y del senador Naidenoff me eximen de exponer lo que iba a decir. En consecuencia, para no repetirnos, voy a pedir la inserción de mi exposición, sin perjuicio de señalar algunas cuestiones generales y de formular una propuesta en particular para que sea considerada por la comisión.

Este proyecto va en un sentido correcto, toda vez que tiende a evitar lo que diariamente todavía vemos, que es el maltrato a los usuarios por parte de algunas empresas.

A pesar del avance que se produjo con el artículo 42 de la Constitución Nacional, la integración de la ley 24.240 al plexo normativo jurídico y las muy buenas modificaciones que hoy se están introduciendo —los institutos que incorpora el Senado mejoran la sanción de la Cámara de Diputados— existe una necesidad de protección a los usuarios. Venimos de una realidad todavía en debate. La cultura del neoliberalismo, las privatizaciones y la desregulación determinó una transferencia gigantesca de recursos de la sociedad hacia algunas empresas concentradas de capital nacional e internacional. Eso lo hemos visto, lo hemos vivido y lo ha padecido la sociedad. Por eso también quiero hacer un reconocimiento, como hecho positivo de la sanción de este proyecto de ley, a toda la tarea de las organizaciones de usuarios. Es decir, que estas son las leyes que vienen de la mano de la participación ciudadana.

Mucho tienen que ver las ONG en la sanción de la ley 24.240 y en la sanción de este proyecto de ley. Y mucho tiene que ver el vencer muchas resistencias de lobbies, como dijo el miembro informante, para concretar la defensa del derecho de los usuarios. En esta articulación de lo que debe ser el mercado, el Estado y la sociedad, estas son las leyes donde la sociedad, mediante las organizaciones de usuarios y de nosotros, los representantes del pueblo, juegan un papel relevante.

Por eso, creo que este es un hecho positivo y espero que la comisión se haga carne de la propuesta que en particular vamos a plantear,

tratando de que quizá no quede un poco deslucida la aprobación de este proyecto de ley, si no abordamos la cuestión de la gratuidad en cuanto a las acciones judiciales.

En concreto, como lo planteaba la sanción de la Cámara de Diputados, que en su artículo 26 modificaba el artículo 53 de la norma proponiendo que las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho e interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita, propongo que se incorpore en el último párrafo del artículo 53 una frase que diga “las acciones gozarán del beneficio de justicia gratuita”. Y en el artículo 27, que es la modificación del artículo 54 de la ley 24.240, propongo agregar la misma frase, que diga “las acciones gozarán del beneficio de justicia gratuita”.

El tema ha sido debatido largamente las comisiones. Por eso no voy a abundar en todo lo rico que fue ese debate, y me parece que incorporar este texto en esta positiva ley, con estas modificaciones enriquecedoras del Senado a la sanción de la Cámara de Diputados, cerraría al final del año una norma muy positiva para toda la sociedad.

Por eso, en nombre del bloque del ARI, del Partido Socialista y de la Coalición Cívica, propongo estas modificaciones.

Sr. Presidente (Pampuro). — ¿La comisión tiene alguna decisión o lo vemos en la consideración en particular?

Sra. Negre de Alonso. — Lo vemos después.

Sr. Jeneffes. — Lo vemos en la consideración en particular.

Sr. Presidente (Pampuro). — Entonces, lo veríamos después.

Tiene la palabra el señor senador Jeneffes.

Sr. Jeneffes. — Señor presidente: ya los senadores preopinantes han destacado la importancia que tiene este proyecto de ley que va a proteger a los consumidores y usuarios. Me quiero detener, fundamentalmente, ya que he sido mencionado en algún diario, en cuanto a mi intervención en este tema y mi crítica hacia el artículo 15 de la ley.

Originariamente, el artículo 15 de la ley 24.240 establecía que en las operaciones de crédito para adquisición de cosas o servicios deberá

consignarse bajo pena de nulidad, y quedaba claro que eran las operaciones de crédito para consumo, para adquirir cosas o servicios.

Ahora bien, el artículo 36 aprobado por la Cámara de Diputados señala en su redacción "en las operaciones financieras y en los créditos para consumo...". De allí vino mi crítica, porque decía "las operaciones financieras" y entendía que este término era muy amplio, porque abarcaba todo tipo de crédito, no sólo para la adquisición de cosas y servicios, sino para todas las operaciones financieras que realizaban los bancos. A mi criterio, este proyecto de ley debía regular únicamente el crédito para consumo o las operaciones financieras para consumo. En el borrador del dictamen este concepto ha sido tenido en cuenta.

Por otra parte, también destacué que si seguíamos con la posición de la Cámara de Diputados estaríamos violando el artículo 565 del Código de Comercio, por el que se disponía que todas aquellas operaciones de préstamos en las que no se había fijado una tasa, la tasa fijada era la tasa efectiva de los bancos oficiales, del Banco de la Nación Argentina. Además, estábamos afectando una operación o un instrumento muy importante como es el crédito, pues no sólo debe existir el crédito para el consumo, sino también para el desarrollo de la República Argentina, es decir, de la industria, de las actividades agropecuarias y de todo tipo de actividad en nuestro país.

Esta observación, reitero, ha sido contemplada en el borrador del dictamen. Ahora se habla de las operaciones financieras para consumo y de crédito para consumo, con lo cual esta indicación ha sido tenida en cuenta.

Por otra parte, voy a mantener otra observación que efectué en el artículo 15, en cuanto a que los tribunales que se fijan como competencia para intervenir en el caso de créditos para consumos son los tribunales del domicilio del consumidor o los tribunales del lugar donde se celebra el contrato, a sabiendas de que aquí nos estamos metiendo en una competencia que es exclusiva de los códigos procesales de las provincias y, por ende, estamos violando el artículo 121 de la Constitución Nacional. En ese sentido, todos nuestros códigos procesales contemplan la competencia en la ley de forma. Por ello, entendía que al fijar expresamente en

esta iniciativa que los créditos de consumo o los créditos financieros para el consumo van a tener el domicilio del contrato o el domicilio del consumidor, estaríamos afectando los derechos de cada una de las provincias de fijar las jurisdicciones y, a su vez, estaríamos afectando la posibilidad de una prórroga tácita de jurisdicción —contemplada en el artículo 1.197 del Código Civil— que permite, expresamente, ya sea por convenio de partes, establecer una jurisdicción —que figura en todos los códigos procesales—, con excepción, en el caso de créditos de consumo, del Código Procesal de Mendoza. En consecuencia, sabemos que también aquí estaríamos incurriendo en la violación de una facultad que la provincia no ha delegado a la Nación.

Por ende, en particular, voy a insistir en esta observación. Entiendo que se deben respetar las autonomías provinciales y permitir que sean los códigos procesales provinciales los que fijen la competencia y la jurisdicción en los casos de los créditos para consumo y de los créditos financieros.

Repito, en particular haré algunas observaciones.

Sr. Presidente (Pampuro). — En realidad, nombraron al senador Mayans, y no a usted.

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como se mencionó acá, este es uno de los modernos derechos del siglo XX, una de las nobles legislaciones y su ubicación, en el plexo societario, ha llevado tiempo. En este sentido, la doctrina francesa fue la más adelantada.

Recién, el miembro informante se planteaba si era suficiente la normativa del Código Civil. Fueron los franceses los que primero dejaron la normativa de fondo para entrar en este espacio. Y la doctrina especializada ha dicho que, en realidad, el siglo XXI es el del gran desafío al derecho de los consumidores, que es cuando se debe profundizar esta relación.

Esta legislación surge como una necesidad frente a la maximización de la ganancia y de la rentabilidad, de la mano del capitalismo salvaje que va dejando pobreza. Así es que falta una legislación que logre darle un equilibrio a este tipo de relaciones. Por eso es muy importante lo

que también se mencionaba acá. Los franceses dicen que el objetivo debe ser la lucha lenta, perseverante, sin pausa, en un tema fundamental, que es la educación de la población. El verdadero objetivo para que esta ley se cumpla es educar a la población.

Soy miembro de las dos comisiones. He compartido y he disentido en muchas cosas. Por ejemplo, respecto de lo que muy bien explicó el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías acerca de las relaciones profesionales, creo que debemos puntualizarlo. De ninguna manera podemos incorporar en esta legislación a las profesiones liberales, en primer lugar porque es una reglamentación originaria de las provincias, nunca delegada desde la formación del Estado federal al Estado nacional. Nunca la delegamos. Si hemos delegado, algunas provincias que tenemos colegios públicos, la reglamentación y el control. Pero hay otras provincias que la siguen manteniendo y es ejercida por los superiores tribunales. Entonces, eso hubiera sido una invasión, una violación a las normas federales.

La otra cuestión que también mencionó el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías es el tipo de obligación. Nosotros no tenemos una obligación de resultado. Nosotros no podemos garantizar un resultado: ni los médicos ni los abogados. Lo que garantizamos es una obligación de medio, es decir, el buen actuar profesional; pero para ello están los tribunales disciplinarios, los códigos de ética y demás. Lo que no podemos hacer es someter esto a una ley del consumidor.

Además, el tema de la propaganda de las profesiones liberales está regulado en los códigos de ética. Recientemente, hemos visto un fallo *in extenso* publicado en las revistas especializadas, referido a la condena a un abogado por ofrecer propaganda ficticia, engañosa, por el propio colegio profesional a través de sus organismos. Me parece muy importante resaltar esto ya que vuelve a la Cámara de Diputados.

Hay algunas observaciones que comparto con el senador Jeneffes y con la senadora Escudero. Quiero comenzar con las relativas al artículo 36, en lo que se refiere a los productos bancarios. Estábamos hablando de relaciones de consumo y, después de releer la versión taquigráfica de la última reunión, me parece que quedaron algunas cuestiones pendientes para que esto

no se contraponga con la legislación nacional. Tenemos una ley, que es la Carta Orgánica del Banco Central, que establece las facultades de esa institución y, entre ellas, está lo referente a la regulación del crédito, a la liquidez, a la iliquidez, a la normativa y a las decisiones que toma, por ejemplo: intervenir en las decisiones que afectan al mercado monetario, prescribir los requisitos de encaje, fijar las tasas de interés, etcétera.

Entonces, estamos fijando —me parecía que, en la comisión, en principio, se había llegado a un acuerdo— que el tema de la información, cosificada como está, es para los productos que tienen tasa fija. Porque, ¿qué pasa con los productos que tienen tasa de interés variable, es decir, aquellos a los que acceden las pymes y los pequeños comerciantes?

Por ejemplo, cuando el Código de Comercio regula el contrato de cuenta corriente bancaria, establece dos tipos: la cuenta corriente con descubierto y la que cuenta con provisión de fondos.

La cuenta corriente bancaria con descubierto, en la cual el banco adelanta fondos en cuenta, es un instrumento de financiación muy importante para el pequeño empresario, el comerciante y la pyme. Pero es un instrumento que funciona, generalmente, con tasa variable. Entonces, si hay iliquidez en el mercado, la tasa es alta; pero si el Banco Central necesita proveer más fondos, la baja para que la gente tome crédito.

Por eso, creo que tenemos que incorporar el tema de la tasa fija, tal como conversamos en la última reunión de la comisión; aquí quedan incluidas las tarjetas de crédito y los préstamos personales, hipotecarios, prendarios, etcétera. No cerremos ni atemos de pies y manos a quienes hoy se están financiando y siempre lo han hecho; aunque sea un costo mayor la tasa de interés.

Pero, además, hay que considerar otra cosa importante. El Banco Central categoriza a los deudores en base a sus facultades. Recientemente, ha vuelto a modificar la circular de categorización de los deudores. Esta no es una cuestión menor, porque en base a ella se modifican las tasas de interés.

¿Por qué? Porque dependiendo de donde se esté categorizado por el Banco Central, la

entidad financiera a la que uno concurre determinar si es riesgoso o no. O sea, todo depende de cómo me hayan categorizado. O sea que el cambio de categorización puede significar que se me aumente la tasa de interés. ¿Por qué? Por cómo está formada la tasa de interés. La tasa pasiva es lo que el banco paga a la persona de la que recibe el dinero, al depositante, por el seguro —que va a ser más caro si soy un deudor riesgoso—, por el costo administrativo, por los encajes, etcétera.

Entonces, si nosotros encorsetamos esta situación y no establecemos una tasa fija, me parece que vamos a sacar del mercado a todo un grupo o segmento que utiliza este tipo de instrumentos bancarios de financiamiento a corto plazo, que sabemos que se conceden siempre a tasa variable, porque cuando uno firma, debe aceptar esa tasa en las condiciones de mercado. Y si fijamos una tasa dosificada, este tipo de operaciones —que no utilizan las grandes empresas— no vamos a cumplir la función que en este sentido tiene la norma. Por el contrario, se logrará el objetivo adverso al aquí planteado.

La otra cuestión sobre la que me quiero detener especialmente, porque me preocupa y constituye un desafío, son las acciones de incidencia colectiva.

Estas se debatieron mucho en la comisión y, al respecto, se hicieron distintas propuestas para regularlas. Nosotros sabemos que se han regulado en Latinoamérica con mucha precisión, en muchos países. Por ejemplo, en Brasil. En general, en las legislaciones iberoamericanas las acciones de incidencia colectiva se encuentran perfectamente reguladas.

Nosotros tenemos una omisión en ese sentido. Y, en realidad, estas acciones las abordamos a través de la ley de protección al consumidor, cuando lo ideal hubiera sido hacerlo por medio de una legislación autónoma, como manifestó el señor senador Fernández. Pero ésta es la realidad que tenemos y, por ello, tenemos que pensar la mejor forma de regular estas acciones colectivas.

En realidad la Corte, a partir de los años 2003, 2004, y 2006, fundamentalmente, ha avanzado fijando algunos criterios para que en el futuro estas acciones de incidencia colectivas pudieran legislar. Y en base a esos criterios generales es que yo había remitido a la comisión un proyecto

de artículo subdividido. Pero creo que debemos tener en cuenta tres o cuatro principios. Primero, que son derechos supraindividuales, que tienen como objeto un bien común y que son derechos no fragmentados. Eso es importante en la definición.

El segundo tema es la no divisibilidad de la acción; ésa es la característica. Esa afectación afecta a uno pero afecta a todos en conjunto, y es materialmente imposible dividir ese reclamo.

El bien que se protege es un bien colectivo. Esto lo ha dicho la Corte y hace una diferencia importante en cuanto dice que hay que dividir y saber diferenciar esa protección colectiva de lo que son las asociaciones profesionales. Entonces, no es lo mismo un colegio profesional que se presenta a reclamar por los intereses de sus asociados —porque éstos sí son reclamos individuales— que una entidad que se presenta para ejercer un reclamo común.

Esta diferencia que hace la Corte es muy importante respecto de la legitimación activa de estas entidades. Esto se menciona en autos “Cámara de Comercio, Industria y Producción c/AFIP”, fallo del año 2003. En este caso, la Cámara de Comercio había demandado al Estado nacional por una cuestión tributaria que afectaba a todos sus asociados; la acción fue rechazada sosteniendo que, en realidad, se trata de una cuestión divisible y que cada uno tiene un interés distinto, si bien la norma es común. La Corte sostuvo que no se trataba de una acción de incidencia colectiva sino de un reclamo individual.

También está el caso “Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos c/Estado nacional”, de 2004, y “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/Ministerio de Economía” de 2003, en los que se establece claramente cuál debe ser la legitimación activa. Por otra parte, en estos últimos fallos, la Corte viene diciendo que este derecho tiene que estar incluido en los estatutos para que este tipo de asociaciones pueda ejercer y deducir estas acciones de incidencia colectiva.

Señor presidente: creo que debemos dejar absolutamente en claro cuál es la diferencia con algunos antecedentes que se están mencionando sobre la legislación norteamericana, que contempla este tipo de acciones. Así, se sostiene que estas acciones son aquellas que deben ser

iniciadas por los afectados. Cuando la inicia un afectado, se notifica al resto de los afectados por el efecto *erga omnes* que esa sentencia tiene. ¿Y por qué se notifica? Porque puede ser que esa asociación no ejerza debidamente la defensa de los derechos. Entonces, antes de darle curso, se notifica a todos para que se sumen, adhieran o cuestionen la representación, porque después esa sentencia tendrá efectos respecto de todos ellos. Antes de notificar al accionado, el juez debe emitir un pronunciamiento sobre si esa acción realmente es de incidencia colectiva. No llega hasta el final del proceso para decir no, como estos casos que la Corte ha rechazado por no tratarse de sujetos legitimados, sino que tiene un estadio intermedio antes de la notificación.

Tengo una propuesta —que enunciaré cuando se trate este artículo— con relación a algunas regulaciones de acciones de incidencia colectiva que creo que pueden ajustarse a los diversos criterios que se han dado en la Corte y, además, a la legislación iberoamericana. Varias de las legislaciones iberoamericanas que contemplan esta situación les establecen un período de tiempo a las asociaciones de consumidores antes de legitimarlas para iniciar esta acción.

Estoy en contra del daño punitivo pues se importa un instituto anglosajón. Considero que la filosofía de nuestra legislación —de origen continental— no es la del daño punitivo, que es un daño ejemplificador. Es decir, se fija un monto ejemplificador y se lo aplica porque se cometió una infracción, más allá del daño directo. La naturaleza jurídica del daño en la República Argentina —el daño que prevé el Código Civil— tiene supuestos para su procedencia: que se haya producido el hecho; que sea ilícito; que esté prohibido; que haya relación de causalidad y que se haya producido un perjuicio.

Y tiene estadios; los abogados los llamamos “los presupuestos de la responsabilidad”. En el derecho anglosajón se lo denomina sanción ejemplificadora; y frente al hecho, se la aplica además de la indemnización del daño directo y de los daños y perjuicios por los que se va a condenar.

Esta medida me parece sumamente riesgosa porque no tenemos un proceso de maduración. Además, hay que estudiar muy bien a los organismos que aplicarán todo este tipo de sanciones. En ese sentido, considero que

no es momento de sancionar un artículo muy novedoso, pero que no hace a nuestra cultura jurídica. Indudablemente es un avance, pero se trata de un salto demasiado alto y que puede ser riesgoso.

Comparto la posición del senador Jeneffes respecto del tema de las competencias. Además, la senadora Escudero planteó el mecanismo del juzgamiento concurrente, que no estaba incorporado. Se dejó el tema de la adopción de medidas, pero no la facultad de juzgar de las provincias, lo cual se vincula con el derecho federal. Y en cuanto a las normas procesales locales y a la declinación de la jurisdicción, eso es absolutamente un derecho exclusivo y excluyente de las provincias.

Lo que planteó el senador Jeneffes acerca de la prórroga de jurisdicción y de la regulación de las normas locales es un derecho de las provincias. Al respecto, también se dijo en la comisión que la Corte reconoció alguna legislación procesal como necesaria, por ejemplo, la de concursos y quiebras.

Pero esa legislación es de orden público porque impacta sobre la economía de un Estado. Es por eso que la legislación común la margina y se necesita la herramienta procesal para unificarla.

En este caso comparto la objeción, y creo que habíamos reformulado el artículo en comisión. Si se deja esa redacción yo acompañaría; en caso contrario me opondré.

En definitiva, creo que se trata de un avance. Y reitero las palabras del senador Fernández en oportunidad del tratamiento de algunos artículos en la última reunión de comisión. El dijo que no pueden sancionarse leyes que se contrapongan con otras normativas.

En ese sentido, en la última sesión de este Senado solo fuimos dos senadores —el senador Rodríguez Saá y yo— quienes votamos en contra de ese proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados donde se planteaba el salvataje de los deudores hipotecarios preconvertibilidad. Además, en un dictamen de minoría, hicimos otra serie de propuestas y, para nuestra sorpresa, advertimos que el Poder Ejecutivo vetó todos los artículos que en su momento habíamos objetado.

Tomo entonces las palabras del señor presidente de la comisión cuando dijo que, por legislar a favor del consumidor, se pasa por encima de las normativas del Banco Central.

Por esa razón, solicito a los presidentes de las comisiones de Legislación General y de Derechos y Garantías que, en lo que hace a las tasas, se deje debidamente aclarado a qué se refiere ya que no sería bueno que luego sufra un veto de parte del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, tampoco se van a alcanzar los objetivos buscados si se impide o se quita el acceso al crédito de las pymes y de los pequeños comerciantes.

Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Cámara constituida en comisión.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 59 votos por la afirmativa. Se ha superado la mayoría prevista por el artículo 81 de la Constitución Nacional.

—El resultado de la votación surge del acta 7.¹⁵

Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobado en general.

En consideración en particular.

Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: en el artículo 12 hay un error de tipeo.

Se alude a las empresas que sobrefacturan y en el sexto párrafo, al final, dice: "...la devolución o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente" y debiera decir: "La devolución y/o indemnización...".

Hay devolución en el supuesto de que el consumidor haya pagado esa sobrefacturación. Pero en ambos casos, si hubiera pagado o no, corresponde la indemnización porque hay una doble facturación.

Sr. Presidente (Pampuro). — Se iba a votar artículo por artículo.

Sra. Escudero. — En realidad, si se acepta la modificación que he sugerido, se puede votar en conjunto hasta el artículo 14.

Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en conjunto los artículos 1º a 14 con la modificación mencionada por la señora senadora Escudero.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 60 votos por la afirmativa. Se ha superado la mayoría prevista por el artículo 81 de la Constitución Nacional.

—El resultado de la votación surge del acta 8.¹⁶

Sr. Secretario (Estrada). — Senador Vera: por favor manifieste su voto de viva voz.

Sr. Vera. — Positivo.

Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, son 61 votos.

Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados los artículos 1º a 14.

En consideración el artículo 15.

Tiene la palabra el senador Fernández.

Sr. Fernández. — Respecto del artículo 15, que modifica el 36, teniendo en cuenta la preocupación y la idea de establecer una redacción ordenada, en realidad estamos hablando de un concepto que brinde al consumidor la mayor información posible. Este es el motivo por el cual vamos a aceptar una modificación que propone la senadora Escudero, que en realidad cambia la redacción del artículo originario.

El artículo arrancaría con la siguiente expresión: "En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse..."

Sra. Escudero. — Sí.

Deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) la descripción de la cosa o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) el precio al contado, sólo para los casos de operaciones a crédito para la adquisición de bienes o servicios; c) el importe a desembolsar inicialmente,

¹⁵ Ver el Apéndice.

¹⁶ Ver el Apéndice.

de existir, y el monto financiado; *d*) la tasa de interés efectiva anual; *e*) el total de los intereses a pagar o el costo financiero total; *f*) el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; *g*) la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar; *h*) los gastos extra, seguros o adicionales, si los hubiere.

Sr. Fernández. — Luego dice: "Cuando al proveedor omitiere alguno de estos datos en el documento que corresponda al consumidor...". Y continúa la redacción original.

Lo que estamos modificando es la redacción original para dar mayor precisión al objeto del artículo. Me parece que con esto están salvadas todas las dudas del límite sobre el que estamos legislando. ¿Está bien?

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — ¿Qué pasa si en el ínterin en que esa relación se plasmó, por ejemplo, legislamos sobre un nuevo impuesto de emergencia equis, como puede ser el de débitos y créditos? Entonces, se le incorpora un costo más.

¿O qué pasa si el Banco Central le saca una normativa para los bancos? ¿Es nulo el contrato, entonces?

Sr. Fernández. — Es un hecho sobreviniente.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Escudero.

Sra. Escudero. — El objetivo de este artículo es que el consumidor tenga la información completa correcta al momento de contratar.

Lo que tenemos que decir con sinceridad es que ni el Banco Central ni la Superintendencia de Seguros ni la autoridad aeronáutica están para proteger al consumidor. Esa es la verdad: nunca lo hicieron y cuando lo hicieron, lo hicieron mal. De modo que queremos que ésta sea la norma y que la autoridad de aplicación que fijamos aquí sea la que controle los derechos de usuarios y consumidores.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — No; yo quiero decir que si el Banco Central no controla está violando la comunicación A-3.244, porque obliga a las entidades bancarias a publicar sus intereses, a poner una pizarra, etcétera.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Quiero hacer una aclaración, nada más.

Después continúa diciendo que su omisión determinará que la obligación del comprador...

Sra. Escudero. — Queda igual.

Sr. Jenefes. — Yo creo que hay un error ahí porque estamos hablando de las operaciones financieras para consumo y de las de créditos para consumo. Tiene que ponerse "tomador"; no hay comprador.

Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien...

Sr. Jenefes. — Es decir, sugiero que se cambie la palabra "comprador" por "tomador", porque estamos hablando de operaciones de crédito y no de compra.

Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Está de acuerdo, señor senador Fernández?

Sr. Fernández. — Sí; es un problema de redacción.

Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Está de acuerdo, señor senador Petcoff Naidenoff?

Sr. Petcoff Naidenoff. — Sí.

Sr. Fernández. — Señor presidente: discúlpe-me, pero quiero redondear el tema de las votaciones: hasta ahí aceptamos modificaciones.

Nosotros insistimos en la redacción que sostiene que la competencia estará dada por el domicilio del consumidor o el del lugar de celebración del contrato. Creemos que ésta es una norma protectora que va dirigida al consumidor.

Además, consideramos que el artículo 42 de la Constitución establece como imperativo que la legislación establecerá un procedimiento eficaz por el que opere la prevención y la resolución del conflicto. Me parece que el derecho laboral es un claro ejemplo de ello, con lo cual hasta acá aceptamos las modificaciones informadas a la comisión.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: insisto en mi posición, en el sentido de que estamos violando las autonomías provinciales, pero dejando de lado eso y buscando la protección del consumidor, está bien fijar la competencia de acuerdo con el domicilio del consumidor si

queremos proteger sus derechos. Pero si fijamos la competencia según el lugar de celebración del contrato, vamos a lograr que todas las entidades financieras burlen la competencia, como cuando en el caso de un contrato celebrado en La Pampa —por ejemplo— se diga “Capital Federal, a los diez días del mes de diciembre del año...”.

Por lo tanto, como contribución sugiero que establezcamos que el tribunal competente, independientemente de que siga objetando que esto es violatorio del artículo 121 de la Constitución Nacional, no debe ser el del lugar del contrato sino el del domicilio del consumidor.

Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Hay asentimiento?

Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: a mí me parece que está bien la redacción del artículo; es decir que se establezca que el tribunal competente será el del domicilio real del consumidor o el del lugar de celebración del contrato, porque justamente el temor que tiene el senador es lo que sucede en la práctica. Es decir, un ejemplo típico sería la venta de un automotor o de un ciclomotor en una ciudad cualquiera, que muchas veces se termina ejecutando en la Capital Federal o en otros puntos del país.

Entonces, la única garantía que puede tener el consumidor es si establecemos la doble opción: el domicilio real del consumidor o el del lugar de celebración del contrato. De esa manera vamos a garantizar efectivamente la defensa de la parte más débil de la relación.

Por eso me parece atinado cuando se establece que la competencia, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos, corresponde al domicilio real del consumidor o al del lugar de celebración del contrato. Esta es la única manera que tenemos, justamente, para evitar el supuesto que es materia de preocupación del señor senador Jenefes.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: voy a reiterar acá lo que dije en la comisión. Esto sucede porque no modificamos la ley de prenda ni la ley 24.411, de titulación. Por eso se permiten estas cosas: se firma y después se secuestran los vehículos; o en el caso de los

inmuebles con hipoteca, la titulación permite desalojar con un escribano y vender. El problema es que hay que modificar esas leyes. En esta Cámara se ha presentado un montón de proyectos al respecto y se han emitido dictámenes, pero nunca logramos que se votaran. Esa es la problemática de fondo.

La señora senadora Escudero planteó otra cuestión a la que yo adherí y que no sé si fue rechazada: me refiero a la vinculada con la palabra “juzgamiento”, que fue retirada de este dictamen y que había sido acordada en comisión. No sé si los presidentes de las comisiones de Legislación General y de Derechos y Garantías tampoco han aceptado eso.

Sra. Escudero. — Vamos por el artículo 15.

Sra. Negre de Alonso. — Está bien; pensé que no se aceptaba ninguna otra modificación.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: insisto en que la competencia de los tribunales debe ser la del domicilio real del consumidor, porque si fijamos la del contrato, va a ocurrir lo que ellos plantean. Entonces, si quitamos el domicilio del contrato y dejamos sólo el domicilio real del consumidor estamos protegiendo al usuario.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Está bien, tiene razón.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Efectivamente, vamos a aceptar la contribución del senador Jenefes. Dejamos un solo domicilio, que es el real del consumidor. Gracias por el aporte.

Sr. Jenefes. — Antes de votar, pido que se autorice mi abstención.

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la autorización para abstenerse del señor senador Jenefes.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.

Se va a votar el artículo 15, con la modificación propuesta.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 57 votos afirmativos y una abstención. Se han superado los dos tercios previstos por la Constitución.

—El resultado de la votación surge del acta 9.¹⁷

Sr. Secretario (Estrada). — ¿Cómo vota la senadora Giri?

Sra. Giri. — Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, se registran 58 votos afirmativos.

Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobado el artículo 15.

Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: en el artículo 20, que modifica el artículo 45, en el último párrafo dice: “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación...”. A continuación debe eliminarse la frase “conforme la delegación efectuada en el artículo 41 de la presente”, porque en el artículo 41 no hay ninguna delegación. El artículo 41 establece cuál es la competencia de las provincias en materia de control. De modo que si se acepta la eliminación de este párrafo podríamos votar desde el artículo 16 al 26 inclusive.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: creo que podríamos votar hasta el artículo 24, porque tengo entendido que la señora senadora Negre de Alonso no comparte la inclusión del daño punitivo.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Aquí viene lo que comentaba recién. En el artículo 17, que sería el artículo 41, originariamente estaba previsto el control, vigilancia y juzgamiento por parte de las autoridades locales. En la última reunión de comisión hablamos de incluir el juzgamiento, pero no está acá en esta redacción.

Por eso decía que me había adherido a la postura de la senadora Escudero. No sé si lo acepta el presidente de la comisión.

Sr. Fernández. — Sí.

Sra. Negre de Alonso. — Perfecto. Entonces, habría que agregar “juzgamiento” en el artículo 41. Quedaría redactado así: Las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley.

Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Petcoff Naidenoff: ¿está de acuerdo?

Sr. Petcoff Naidenoff. — Sí.

Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 16 a 26.

Sr. Petcoff Naidenoff. — No; los artículos 16 al 25.

Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 16 a 25.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 60 votos por la afirmativa; unanimidad. Se ha superado la mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.

—El resultado de la votación surge del acta 10.¹⁸

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 16 a 25.

Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: ahora entramos en el famoso tema de la gratuidad.

Sra. Negre de Alonso. — Del daño punitivo, primero.

Sr. Fernández. — Del daño punitivo; y avanzo sobre el tema de la gratuidad, respecto del que indudablemente no hay posiciones uniformes.

En realidad, se eliminó la gratuidad por varios motivos. En primer lugar, porque ello había sido originariamente vetado en la ley que estamos pretendiendo modificar, por lo cual el criterio del Poder Ejecutivo sobre la gratuidad es conocido.

¹⁷ Ver el Apéndice.

¹⁸ Ver el Apéndice.

En segundo lugar, porque la gratuidad es un instituto que pretende justamente favorecer a quienes por insuficiencia en los medios económicos no pueden acceder a la justicia y, en este sentido, cualquier consumidor tiene asegurada la gratuidad acreditando la carta de pobreza.

Y, en tercer lugar, esto se eliminó, para evitar la industria de los juicios, fundamentalmente en aquellas organizaciones no gubernamentales que representen a consumidores y usuarios.

Obviamente, he escuchado distintas voces sobre el particular y creo que el instituto está perfectamente delimitado; al respecto hay fallos jurisprudenciales a cansarse sobre cuál es el objetivo final de la gratuidad. Por lo tanto, no vamos a hacer de esto una cuestión de Estado.

Me parece que la redacción original es acorde con el espíritu que tuvo el Poder Ejecutivo a la hora de vetar originariamente la gratuidad en la ley madre. Esos fueron los motivos por los cuales lo eliminamos.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: si bien existe una confusión o quizás una errónea redacción —porque se establece que las actuaciones judiciales que se inicien con la presente ley, en razón de un derecho o interés individual, gozan del beneficio de justicia gratuita; y como se ha discutido, no existe justicia gratuita u onerosa—, nosotros consideramos que sobre esta cuestión es importante insistir en la redacción original de la Cámara de Diputados y, así, garantizar el beneficio de la gratuidad.

La experiencia práctica nos indica que la inmensa mayoría de los usuarios y consumidores, desde su individualidad, muchas veces no recurren a la justicia para hacer valer la vulneración de un derecho, porque no están en condiciones de contratar los servicios de un profesional del derecho ni de afrontar los gastos que demande una pretensión judicial en concreto.

Quizá podemos eliminar el párrafo en donde se señala “justicia gratuita” y hablar de garantizar el beneficio de litigar sin gastos.

La sanción de la Cámara de Diputados también deja a salvo una cuestión muy importante, ya que allí se establece que la parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor

mediante incidente, en cuyo caso se cesa el beneficio.

Por lo tanto, aquí se invierte la carga de la prueba, posibilitando que la parte demandada acredite que efectivamente el reclamante está en condiciones económicas de afrontar un juicio. Esto ya lo habíamos visto en otros artículos de la misma iniciativa; y tiene que ver con una visión de una carga dinámica de la prueba. Es decir que la parte más fuerte, que es la que está en condiciones de probar, deba aportar ciertos elementos del pleito.

Por eso, me parece adecuado garantizar el acceso de todos a litigar sin gastos, con la salvedad de la propia redacción de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: considero que aquí estaríamos mezclando la competencia nacional con las provinciales. Si bien podríamos establecer la gratuidad de los procedimientos para los juicios que tramitan en la justicia federal o en la nacional de la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de justicia es un recurso local de las provincias. En consecuencia, no podríamos obligar a que las provincias acepten este beneficio de litigar sin gastos, porque se trata de un tema local, de recursos absolutamente locales.

Yo estoy convencida de que la gratuidad es parte del acceso a la justicia. Me parece que aquí estamos frente a la democratización del acceso a la justicia; eso es lo que nos marcan los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, con las acciones de incidencia colectiva.

Sin embargo, no creo que en este proyecto de ley, que es una norma de fondo, tengamos que hablar de la gratuidad o no, porque es un tema esencialmente local.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: todo esto me parece muy didáctico, pero tenemos que definir la posición de la comisión, para proceder a la votación, pues hay una larga lista de proyectos de senadores a considerar.

Por lo tanto, solicito que la comisión defina una postura, porque el debate lo hicimos en general y ya concluyó. En consecuencia, pido que avancemos con este asunto.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: yo no soy abogado, pero creo que vamos a sancionar una norma que consolidará y reglamentará un derecho establecido en la Constitución, que es de orden público y de aplicación para los usuarios y consumidores de todo el país. Por consiguiente, considero que está bien establecer el principio de la gratuidad, de acceso gratuito a la justicia.

De lo contrario, deberíamos tomar la sanción de la Cámara de Diputados y convalidar directamente el criterio allí establecido.

Como bien lo ha planteado el presidente de la comisión, este tema es realmente un escollo al que los usuarios se enfrentan a la hora de concretar el ejercicio de un derecho, que lamentablemente no se hace efectivo si no es a través de la vía judicial.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a dar una opinión personal. Yo comparto lo que acaba de decir el señor senador Morales. Si éste es un proyecto de ley de defensa del usuario, de los humildes, de los pobres y de los más débiles, el principio de gratuidad tiene que ser inherente a esta norma, si no para qué votar esta iniciativa.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Martínez.

Sr. Martínez. — Señor presidente: se dijo durante el debate que éste iba a ser el siglo de los derechos de los usuarios. Evidentemente, la gratuidad es un tema fundamental. Pero por allí se planteó que si alguien demostraba ser pobre, tenía derecho a acceder a la justicia gratuita. En ese sentido, nosotros consideramos que no se tiene que mostrar un carné de pobre para acceder a la justicia.

En consecuencia, creo que la redacción propuesta que contemple el beneficio de litigar sin gastos sería la correcta.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Señor presidente: en uno de los proyectos que estaban agregados, se dotaba a la futura ley del beneficio de litigar sin gastos y se invitaba a adherir a las provincias. En efecto, ésta es una ley de fondo, pero también es cierto

que la tasa de justicia les corresponde ser percibida por los gobiernos provinciales.

Entonces, como decía la señora senadora Escudero, lo pertinente es establecer el principio de gratuidad, porque corresponde en la ley de fondo, e invitar a que las provincias adhieran a la iniciativa.

Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Hay asentimiento para la propuesta del senador Guinle?

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). — Entonces, queda redactado tal como lo propuso el senador Guinle, y votamos el artículo 26.

Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: quiero aclarar que a la redacción del artículo 53 —que es el artículo 26 del borrador— le vamos a incorporar el apartado de la sanción de la Cámara de Diputados, donde se garantiza el beneficio de la justicia gratuita.

Es decir, las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley, en razón de un derecho de interés individual, gozan del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.

Eso es lo que vamos a incorporar a la nueva redacción de este artículo. De la misma manera, para las acciones de incidencia colectiva, vamos a garantizar lo que ya garantizó la Cámara de Diputados, es decir, el beneficio de la gratuidad.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: está sometiendo a votación... O se equivoca...

Sr. Presidente (Pampuro). — Es probable.

Sra. Negre de Alonso. — Usted dijo que sometía a votación el artículo 26, pero todavía no hemos votado el artículo 25, que es el referido al daño punitivo.

Sr. Presidente (Pampuro). — El artículo 25 está votado.

Sra. Negre de Alonso. — No.

Sr. Presidente (Pampuro). — ¿No?

Sra. Negre de Alonso. — No. No se votó.

Sr. Presidente (Pampuro). — Entonces, vamos a votar el 25.

Por Secretaría se hará una aclaración al respecto.

Sr. Secretario (Estrada). — Ya se votaron los artículos 16 a 25, tal como lo manifestó el senador Naidenoff.

Sr. Presidente (Pampuro). — Así es.

Tiene la palabra, senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: pido reconsideración de la votación, porque el senador Petcoff Naidenoff dijo expresamente “Menos ése, que la senadora Negre tiene objeciones”.

Se trata, nada más y nada menos, que de una multa de hasta 5 millones de pesos, más allá de todas las indemnizaciones. En mi discurso en general aclaré que me iba a explayar sobre este tema.

Por lo tanto, reitero, solicito reconsideración de la votación, porque no puedo acompañar con mi voto el daño punitivo. Lo fundamenté expresamente. Dije que es un instituto del derecho anglosajón y que, sin perjuicio de todas las indemnizaciones que se fijan, se establece un daño ejemplar de hasta 5 millones de pesos.

Dejo constancia de que voy a votar en contra.

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración la moción de reconsideración formulada por la senadora Negre de Alonso.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado. En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 57 votos por la afirmativa; 3 por la negativa. Supera la mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.

—El resultado de la votación surge del acta 11.¹⁹

Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobado el artículo 25.

Tiene la palabra el senador Fernández.

Sr. Fernández. — Aceptada la gratuidad— en los términos..., que no hace falta ponerlos, porque está en la redacción—, votaríamos sin modificaciones hasta el final.

Sr. Presidente (Pampuro). — Artículos 26 al 35.

Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: acá están las acciones de incidencia colectiva. Le quisiera preguntar al señor senador Fernández si no vamos a hacer ninguna modificación. El dijo que se iban a proponer algunas modificaciones. Pero, tal como se está planteando, vamos a votar todo hasta el final. ¿No se va a plantear ninguna modificación al artículo de acciones de incidencia colectiva?

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — En cuanto a las acciones de incidencia colectiva hay dos propuestas de modificación que no obtuvieron consenso; una presentada por la senadora Negre de Alonso y, otra, por la señora senadora Escudero.

Como efectivamente el abordaje a este tema es de dos comisiones y no hay consenso respecto de ninguna de las redacciones propuestas, lo que yo dije al momento de abordar el tema, era que votáramos esta norma y asumiéramos el compromiso de tratar las acciones de incidencia colectiva en una iniciativa específica, que sería lo correcto. Porque, reitero, no hay consenso para abordar ninguna de las modificaciones.

Así que, tal como está redactado, sin aceptar modificaciones, pasemos a votarlo.

Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 27 al 36.

Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: entonces, voy a dejar constancia de que voto en contra el artículo 27, referido a las acciones de incidencia colectiva.

Sr. Presidente (Pampuro). — Se deja constancia.

¹⁹ Ver el Apéndice.

Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: en el mismo sentido, dejo constancia de mi voto negativo al artículo 27, votando favorablemente el resto de los artículos en consideración.

Sr. Presidente (Pampuro). — Se deja constancia.

Tiene la palabra el señor senador Martínez.

Sr. Martínez. — Señor presidente: el bloque del ARI también deja constancia de su voto negativo al artículo 26.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Está aceptada la gratuidad en los artículos 26 y 27, señor senador. Hemos aceptado el beneficio de la gratuidad en el texto de dichos artículos.

Sr. Presidente (Pampuro). — En consecuencia, vamos a votar hasta el artículo 36, dado que el 37 es de forma.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 60 votos por la afirmativa, con las excepciones que se han especificado en el caso del señor senador Jenefes y de la señora senadora Negre de Alonso. También en este caso se ha superado la mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.

—El resultado de la votación surge del acta 12.²⁰

Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Cámara de Diputados.²¹

A continuación, corresponde votar los pedidos de inserción solicitados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.²²

10

RESTITUCION DE DERECHOS A PERSONAL DEL EJERCITO

Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde tratar el ex Orden del Día N° 426, que contiene un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 1° de la ley de restitución de derechos a personal del Ejército.

Para especificar algo que todos van a entender, se trata de la famosa reparación a los llamados "Treinta y Tres Orientales". Es decir, a los militares que fueron sancionados por el Proceso Militar por no responder a las directivas de sus superiores.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. — Señor presidente: agradezco al señor secretario que haya avanzado en informar sobre el proyecto.

Realmente, esta iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo cuando era ministro de Defensa quien ahora ocupa la Presidencia provisional del Senado, y presidente, el doctor Kirchner. Y fue informada por el diputado Villaverde.

Tal cual anunciaba el señor secretario, el proyecto tiene sus antecedentes en 1985, cuando se sanciona la ley 23.223, por medio de la cual se procuró restituir y reparar la situación sufrida por los jefes y oficiales del Ejército argentino pasados a retiro obligatorio a raíz de distintas resoluciones.

En 1980, el Ministerio de Defensa explicitó que consideraba respecto de hombres de la fuerza, especialmente del Ejército, que su permanencia en actividad perjudicaba la cohesión espiritual de los cuadros, por no encontrarse adecuadamente compenetrados con la filosofía y el sentir institucional del Proceso de Reorganización Nacional.

Entonces, a estos treinta y tres hombres de las fuerzas armadas, del Ejército, se los conoció y se los conoce como los "Treinta y Tres Orientales", rememorando por analogía a los Treinta y Tres Orientales de Artigas.

Indudablemente, este proyecto tiende a suplir dos limitaciones del artículo 1° de la ley 23.223, que tenía un límite temporal en 1985 y, además,

²⁰ Ver el Apéndice.

²¹ Ver el Apéndice.

²² Ver el Apéndice.